

Virgen, contra la providencia dictada por la gofatura política de dicha Capital, fecha 19 de Junio próximo pasado, en virtud de la que se suspendió al quejoso del empleo de médico de la municipalidad y en la administración de la vacuna en la misma, con cuya providencia alega el promovente se ha violado en su persona la garantía consignada en el artículo 21 de la Constitución general de la República. Considerando: que la suspensión de empleo y en la administración de la vacuna, impuesta al O. Gomez Virgen por el gofo político de Zacatecas, se ha dictado sin que esta autoridad tenga facultad para ello, puesto que ni el reglamento económico político que él cita, ni en ninguna otra disposición legal se le dá esa facultad, que por su importancia no puede tener el carácter de correccional, única que en uso de sus atribuciones normales pueda decretar y hacer efectiva la autoridad administrativa. artículo 21 citado: que por lo mismo, la gofatura de Zacatecas se ha excedido en sus facultades al mandar suspender al promovente en las funciones á que se refiere en su ocurno de 4 de Junio anterior.

Se decreta: que por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Zacatecas en 28 del pasado Junio, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al O. Fernando Gomez Virgen, contra la Orden de la gofatura política de dicha Capital, fecha 19 de Junio citado, por la cual se suspendió al expresado Gomez Virgen en el empleo de médico de la municipalidad y en la administración de la vacuna, y contra cuya providencia se ha promovido el presente recurso de amparo.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó en revision, acompañándolo testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que

TOMO IV.—PARTE II.

formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Aza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 15 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

CRIMINAL

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Tamaulipas contra D. Nicolás Grijalva, por peculado.

PEDIMENTO DEL O. PROMOTOR FISCAL

O. Juez de Distrito:—Al encargarse el O. Crescencio Villca de la Administración principal de correos de esta Ciudad, encontró que el Administrador saliente D. Nicolás Grijalva, estaba en descubierto de una cantidad que al principio se creyó ser de 4,037 pesos 67 centavos, pero que definitivamente resultó ser de 2,824 pesos 99 centavos. En las declaraciones y confesion con cargos, confiesa Grijalva haber tomado la cantidad que faltaba. Plenísimamente comprobado como está el delito, y escrupulosamente seguidos todos los trámites de la causa, falta solo sentenciarla, una vez oída la defensa referente al caso.

El fiscal ha examinado todas las leyes que cita Erericho (voz Peculado) en: unas, como la 14, tit. 14 part. 7ª, se habla de los que administrando maravedis del Rey, no los emplean en lo que debían sino en provecho propio, á que se impone la pena de devolver todo lo tomado con el tres tantos. La 18, tit. 14 part. 7ª, habla de los far-

tadores de caudales públicos á que el Juez debe escarmentar públicamente con *feridas de azotes ó de otra quisa que cause vergüenza*, añadiendo que si es *oficial del Rey, que hubiere de recablar sus pechos ó sus derechos, que debe morir por ende*. La 15, tit. 12 libro 15, de N. R. habla de los que violentamente tomen para sí los dineros públicos, aplicándoles la pena de muerte y perdimento de bienes. Por último, la real orden de 14 de Marzo de 1807, que tanto por ser menos rigurosa cuanto por la posterioridad de su fecha, cree el fiscal que es la disposición vigente aplicable al caso, pone en vigor el real decreto de 17 de Noviembre de 1790, y la ley 45, tit. 4 lib. 8, de la Rec. La primera de estas disposiciones, dice así entre otras cosas: "declaro y mando que si faltando alguno á obligación tan precisa ó indispensable, abusare de mis reales haberes para otros fines aunque sea sin ánimo de hurtarlos, y si con el de reponerlos y aprontarlos, y aunque los apronte que de por el mismo hecho *privado del empleo y de poder obtener otro alguno* de mi real servicio, que si no reintegrare el descubierto que por este abuso resultare en el presitado término de tres meses, y se empesare á proceder en la causa, se añada á la pena insinuada de privacion de empleo, la de presidio en uno de los de Africa ó de América segun parezca, desde 2 hasta 9 años segun el perjuicio que haya causado á mi real hacienda, aumentando la calidad de que no salgan de ellos sin mi real licencia &c."

Conforme á la disposición anterior, se ve que la pena del peculado es arbitraria, y que por lo tanto, á los Jueces toca agravarla ó minorarla segun las circunstancias. Las de D. N. Grijalva, tienen algo que le favorece: es muy jóven, inesperto en materia de oficinas y manejo de caudales, no se le exigió fianza como debió haberse hecho, tiene una familia que acaso ha sufrido privaciones en la época de escasez por que ha pasado en este Puerto. No todo el mundo tiene la suficiente fortaleza de alma para

no subvenir á una imperiosa necesidad doméstica, tomando el dinero ageno que se tiene en guarda, con la esperanza de reponerlo antes que se note su falta. Acaso así fué como empesó Grijalva á disponer de los fondos que estaban en su poder, y luego su inesperienza y la falaz esperanza de indemnizar lo tomado con alguna ganancia en el juego, lo fué undiendo mas y mas en el abismo que involuntariamente se abría.

En materia de penas arbitrarias, cada uno entiende el arbitrio á su manera, una conciencia demaciado rígida podría ver suma benignidad en la pena que á otra le parezca proporcionada y acaso hasta severa.

El fiscal ha procurado formarse un punto de partida para pedir la aplicacion de la pena en el caso presente, punto que tiene que ser imaginario, ya que la ley no lo fija, pues entre dos años de presidio como minimum, y nueve como maximum que ella señala, puede haber mil términos medios.

Este punto de partida lo ha tomado el fiscal de lo que dicho Grijalva, ocupado segun sus conocimientos que no son muy vulgares, pueda ganar diariamente, que no le parese exesivo suponer esa ganancia equivalente á cuatro pesos. Privarlo pues de tantos dias de ganancia y de libertad cuantas veces hay cuatro pesos en la cantidad que sustrajo, cree el que suscribe y puede ser una pena proporcionada á la responsabilidad en que ha incurrido, supuesto que pecuniariamente no puede indemnizar aquella cantidad. Pero como hecha la cuenta de los dias de prision que debía sufrir Grijalva, segun la anterior suposicion resultan solo 706 (cociente de 2824 divididos por 4) es decir, menos de los dos años que la ley señala como minimum de pena; el fiscal opina que se le condene á los dos años completos, con declaracion de inhabilidad para obtener otro emple, por exigirlo así la misma ley, y con descuento del tiempo que lleva de prision.

En este sentido, suplica al Juzgado se sirva pronunciar su fallo definitivo.

Tampico, Agosto 13 de 1870.—*Lic. M. Ortiz*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Tampico, Setiembre 8 de 1870. Vista la presente causa segunda en este Juzgado contra D. Nicolás Gríjalva, natural de Bayamo en la Isla de Cuba, de 30 años de edad, casado, y exadministrador principal interino del Correo de esta Ciudad, por el delito de peculado; y en ella el oficio de fojas 1 del C. Administrador de la misma oficina Crescencio Villola, en que participó que al hacer aquel la entrega de ella, resultó haber un desfaldo total de cuatro mil treinta y siete pesos, sesenta y siete y tres cuartos centavos, la instructiva del procesado de fojas 4 á la 7, el auto en que se declaró bien preso, y la providencia que dictó este Juzgado para cubrir la vacante de interventor interino al empleado inmediato C. José M^{te} Gonzalez, la nota á fojas 8 del espresado Administrador en que manifiesta no ser el desfaldo de cuatro mil, treinta y siete pesos, sesenta y siete y tres cuartos centavos, como equivocadamente dijo en su anterior oficio, sino el de tres mil ciento treinta y tres pesos sesenta y cuatro y tres cuartos centavos, explicando en que consistía esa diferencia, y las copias certificadas que á ella acompañó visibles á fojas 9 y 10, por las cuales consta la entrega que le hizo Gríjalva, al mismo de la espresada oficina, la liquidacion mandada pedir por auto de 22 de Febrero último al C. Visitador de Correos y remitida por éste en 2 de Mayo próximo pasado, que corre á fojas 15, para saberse á punto fijo cual era la cantidad del desfaldo, apareciendo por ella ser la de dos mil ochocientos veinticuatro pesos ocho centavos, la ampliacion de la declaracion del procesado, practicada con vista de aquella á fojas 14 y 16 frente, la confesion con cargos del reo á fojas 18 vuelta y 19, lo

alegado por su defensor, y lo pedido por el Ministerio fiscal, con cuanto mas de la causa consta, se tuvo presente y verconvino.

Considerando: que el delito está probado no solo con la confesion del reo, sino tambien con las constancias que de esta causa aparecen, siendo una de ellas la liquidacion del C. Visitador de Correos, corriente á fojas 15, donde se evidencia que el desfaldo fué por la cantidad de dos mil ochocientos veinticuatro pesos ocho centavos; que la única excepcion que opone para su defensa en el cargo que se le hizo, es la de que al tomar esa cantidad fué con ánimo de reintegrarla, para lo cual ocurrió al medio ilícito del juego, ofuscándose mas y mas con esta idea; que aunque esta circunstancia la confiesa, como confiesa igualmente, que no era la manera de reponer la cantidad que tomó de las rentas federales, ni lo exonera de su culpabilidad, ni la atenúan las reflexiones que se formó al contestar el cargo, porque esta excusa no es atendible por la ley, que reputando á los administradores de las rentas de la Nacion, como sus depositarios, cometen un abuso pumbe al disponer de ellas, *aunque sea sin dano de hurtarlas y si con el de reponerlas y aprontarlas, y aunque las apronten, quedan por el mero hecho privados de los empleos y de poder obtener otros algunos*, segun dice la real órden de 14 de Marzo de 1807;

Considerando: que por lo tanto han concurrido circunstancias agravantes de que debe hacerse mérito, pues si bien pudieran tomarse en cuenta las razones que expuso el reo para desvanecerlas, no lo son, porque á mas de que no hay otra justificacion que demuestre lo contrario, confiesa paladinamente su delito con un arrepentimiento digno de lamentarse: que para todo esto no ha dejado de concurrir la igualmente agravante de haberse ausentado para el Estado de Veracruz desde el 17 hasta el 22 de Diciembre del año pasado, dejando en manos secundarias la oficina de su cargo, cayó

abandono por justificable que sea la causal, debió en este caso dar el aviso oportuno á quien correspondía ó á una autoridad competente para cubrir toda responsabilidad en caso necesario.

Considerando: que si bien pudiera aplicársele la ley 14 tít. 14 part. 7ª que trata sobre la devolución de lo tomado con el tres tanto, el reo no podría dar cumplimiento á la pena establecida por ella, en virtud á no tener bienes con que responder, segun es notorio y aseveró en su instructiva de fojas 6 vuelta: que tampoco lo sería la 18 del mismo título y partida, por no estar en uso, pugnando así con los progresos de la civilización actual, y podemos decir derogada por la autoridad irresistible del tiempo: que la 15 tít. 12 lib. 15 de la Novísima Recopilación, debe templarse su rigor por otras que se adopten mejor al hecho de que se trata, guardando la justa proporción entre el delito que se comete y el castigo que se impone; que la citada real orden de 14 de Marzo de 1807, publicada en el tomo 39 de las Pandectas, bajo el núm. 4,782, mas benigna que la anterior y aun equitativa en el modo de aplicar la pena, deja al arbitrio de los Jueces la que ha de imponerse á los reos segun las circunstancias, desde dos hasta nueve años de prision; y en el mismo sentido se explica el real decreto de 17 de Noviembre de 1790, publicado en el tomo 29 de las ya citadas Pandectas, bajo el núm. 2801, en concordancia con la ley 45 tít. 4 lib. 8 Rec. En vista de tales disposiciones, y con fundamento del arbitrio judicial que á los Tribunales concede la ley 8 tít. 31 part. 7ª:

Primero; se condena á D. Nicolás Grijalva, á dos años de prision inclusive el tiempo de la ya sufrida, contada desde el siete de Enero último:

Segundo; que suspenso de su empleo segun se previno por auto de 7 del mismo mes y año, sin goce de sueldo, no estando el presente Juez facultado para privarlo de él, comuníquese esta resolución al C. Mi-

nistro de Gobernacion por medio de atento junio, para los efectos á que hubiere lugar; y

Tercero; Notifíquese esta sentencia á quienes correspondía, elevándose la presente causa á la superioridad para su revision correspondiente. Así definitivamente juzgando, lo decretó y firmó el C. Lic. Ramon Rosales, Juez de Distrito del Estado de Tamaulipas, actuando por receptoría; de que testificamos.—*Lic. R. Rosales.*—*Alfredo Villaverde.*—*E. Chiarella.*

Pedimento fiscal del Tribunal de Circuito.

C. Juez de Circuito.

El Promotor fiscal dice: que el Juez de Distrito de Tamaulipas residente en Tampico, formó esta causa contra D. Nicolás Grijalva, ex-administrador interino de correos del propio Tampico, por el delito de peculado, de que aparece responsable por el desfaleo de dos mil ochocientos veinticuatro pesos, ocho centavos (\$2,824.08) que ha tenido en los fondos de la hacienda pública, que estuvieron á su cargo como empleado de correos, segun el resultado que dió la última liquidación de fojas 15 practicada por el C. visitador de la misma renta de correos, José R. Esparsa.

Como el responsable de que se trata, desde luego ha confesado su grave falta, el delito que ha cometido, tomando fondos de la renta y distrayendolos de su objeto, procurando solo atenuar su falta, en cuanto cabe esta atencion con las consideraciones que dice tuvo para comenzar á disponer de esos fondos agenos, en que luego se precipitó arrastrado por la pasión del juego, hasta disponer de la cantidad en que consiste el desfaleo ó descubierto; tanto el C. Promotor fiscal como el Juez, se fijaron en la pena con que segun las leyes se debía castigar tal delito, imponiéndose al fin la de dos años de prision, conforme con las leyes

real orden de 14 de Marzo de 1807 y real decreto de 17 de Noviembre de 1790, dejando al Ministro de Gobernacion, el que haga la declaracion de que queda suspendido del goce de sueldo.

El que suscribe, en cumplimiento de su deber, se ha encargado de examinar detenidamente, para la debida apreciacion del hecho que se va á castigar, las circunstancias en que se dice fué cometido; así como también examinará las leyes que se han aplicado en el caso para imponer la pena de que se ha hecho referencia.

En cuanto á lo primero, las circunstancias que se han alegado como atenuantes, y que consisten en la posicion desesperada en que poco á poco fué colocándose el responsable hasta el extremo de apelar al juego, con la mira de ver si así podia recuperar lo perdido ó tomado imprudentemente de las arcas de la Nacion, lejos de encontrarlas el fiscal como parece las consideró la sentencia de primera instancia, como tales atenuantes, puesto que impuso el minimum de la pena que señalan para tales delitos, las leyes que se citan en la misma sentencia, las reputa como agravantes que han calificado el delito, por decirlo así, y hechole digno de un severo y ejemplar castigo.

Que por una desgracia imprevista, una necesidad extrema ó otra causa semejante y si se quiere aun hasta por la misma pasion del juego en un momento dado, se cometa falta semejante por una sola vez, bien se concibe esto, porque es tal la naturaleza humana, que la voluntad mas fuerte y caracterizada cede y se anonada, sin que le sea posible eximirse de caer en el abismo, abierto por causa de su imprudencia primera ó pasion dominante.

Pero que dia á dia y en toda calma, con toda libertad y meditacion se estén tomando fondos ajenos para fomentar un vicio insaciable como es el del juego, á pretexto de sacar así lo que individualmente se ha tomado, y luego se venga diciendo,

que precipitado en el abismo por la engañadora pasion del juego, no le fué posible volver sobre sus pasos, y así fué como se hizo responsable del dinero que le falta, cediendo solo al imperio de una fuerza mayor; esto si que no puede consiliarse como causa atenuante del delito á que ha dado origen; esto si que en lugar de atenuar la responsabilidad del que así ha abusado de un modo tan escandaloso de la confianza que se depositó en él para el desempeño del empleo que suplía, reagrava el delito de que aparece responsable, haciéndolo digno de un severo y ejemplar castigo.

Este empleado que se hacia indigno de serlo, desde el momento en que faltando á sus deberes unas sagrados comenzó á tomar fondos ajenos para sus necesidades ó sus vicios, debió él mismo escusarse de seguir en el empleo á que tan mal correspondía, luego que cometió su primera falta, pues solo obrando así, habria dado una prueba de su poca voluntad en seguir con las mismas faltas, que al fin lo habian de conducir al estado que hoy guarda, de tener sobre si una fuerte responsabilidad, como consecuencia del peculado á que apeló, segun dice, para salir de su mala situacion; situacion creada por él mismo y mantenida de propósito hasta el último momento, y solo cuando ya no tuvo modo de ocultarla, por tener que hacer al nuevo empleado la entrega correspondiente.

Y si no se hubiera dado esta circunstancia, sin duda que se hubiera seguido por tal empleado derrochándose los fondos públicos, como hasta aquí habia sucedido, sin tener en cuenta para abstenerse de ello, que los fondos de que se disponia, no debian tocarse por nada, y mucho menos para darles la inversion que el mismo responsable confiesa les daba, siendo por esto mucho mas responsable en su conducta y mercedor de un fuerte y ejemplar castigo.

Así es, que las circunstancias que en primera instancia se alegaron y tuvieron presentes para atenuar la pena con que debe

castigarse este delito, lejos de servir para esto, es decir, para atenuar la responsabilidad en que se ha incurrido, sirven para poner mas de manifiesto, quitando toda excusa, lo agravante del hecho de que se trata y la necesidad que hay de castigarlo severamente para impedir los funestos efectos que resultarian de su impunidad ó lenidad de la pena que se imponga.

Ahora, por lo que respecta á las leyes en que se funda la sentencia de que se ha venido hablando, el fiscal las encuentra aplicables al caso, porque efectivamente hablan del delito de peculado, y de las penas con que debe castigarse, y á falta de leyes posteriores, dictadas *expresso* para nuestra nacion sobre el delito que motiva este proceso, y penas con que deba castigarse, no hay mas que atenernos á las antiguas, que aunque dadas para otros tiempos y en otra forma de gobierno, pueden sin embargo adoptarse aun, principalmente atendiendo al arbitrio judicial, que ya desde aquella época se dejaba á los jueces, para que moderaran ó agravaran las penas segun las circunstancias. Pero si está conforme con que las leyes en que se funda la sentencia, sean las aplicables al caso, no lo está en cuanto á la pena que se ha señalado de dos años de prision con descuento, y sin hacer la declaracion de inhabilidad perpetua para obtener otro encargo de confianza pública. Juzga el fiscal haber dicho lo bastante, demostrando que las circunstancias que se alegaron y tuvieron en la sentencia de primera instancia como atenuantes, puesto que se impuso la misma pena de las señaladas por la ley, lejos de tener tal caracter sirven por el contrario, para poner de manifiesto la gravedad del hecho bajo las que ha sido ejecutado.

Por lo tanto, no se ocupará ya de entrar á un largo exámen sobre la conveniencia ó inconveniencia de la pena, segun la calificación que debe hacerse del delito que con ella se castiga; y solo hará observar, que estando demostrado hasta la evidencia la in-

justificable conducta observada por ese empleado en el desempeño del cargo interino que se le confiara, conducta que lo hace acreedor á un severo y ejemplar castigo, la sentencia de primera instancia debe ser reformada, imponiéndose al culpable de peculado, ya que segun aparece, carreo ó no tiene bienes para reintegrar á la hacienda pública los fondos que le tomó, una pena mayor que la designada, como por ejemplo la de cinco años de prision, con la pérdida de su empleo de interventor que antes tenia y con la declaracion expresa de quedar perpetuamente inhabil para obtener cargo alguno de confianza pública; todo de conformidad con las mismas leyes que se citan en la sentencia de primera instancia.

Concluye, pues, el fiscal, proponiendo la reforma de la sentencia dictada en primera instancia en esta causa segunda contra el ex-administrador interino de correos de Tampico, Nicolás Grijalva, por el delito de peculado, conderando al responsable de tal delito á cinco años de prision y á perder su empleo de interventor de la misma oficina que tenia antes, así como á quedar inhabilitado perpetuamente para obtener otro empleo de confianza pública; todo de conformidad con las leyes que deja citadas en el curso de este dictámen, y que son las mismas en que está basada la sentencia dicha de primera instancia.

Monterey, Marzo 16 de 1871.—Lic. Antonio María Elizondo. Es copia que certifico. Monterey, Julio 27 de 1871.—Antonio María Elizondo.

Sentencia del Tribunal de Cívico.

Monterey, 24 de Julio de 1871.—Vista esta causa instruida en el Juzgado de Distrito de Tamaulipas contra D. Nicolás Grijalva, contador y ex-administrador interino de correos en Tampico, por el delito de peculado: visto el oficio en que el Administrador propietario de dicha renta, O. Crescen-

cio Villela, denunció para los efectos legales ante la autoridad respectiva, el hecho de que Grijalva al verificar la entrega de la oficina de correos que era á su cargo, había salido descubierto en una cantidad de cuatro mil treinta y siete pesos sesenta y siete tres cuartos centavos, cantidad que, rectificadas las operaciones de la cuenta, se redujo á la de tres mil ciento treinta y tres pesos, sesenta y cuatro tres cuartos centavos, y vuelta á examinar por el Visitador de dicha oficina, quedó definitivamente en dos mil ochocientos veinticuatro pesos, ocho centavos, (fojas 1, 8 y 15); vista la inquisitiva y ampliaciones del encausado, en las que confiesa lisa y llanamente haber tomado la cantidad de pesos que al hacer la entrega resultó faltando, y perdiéndola en su mayor parte en el juego, escepcionándose de haber cometido tal falta con manifestar, que notando un pequeño descubierto en los fondos que manejaba, y temiendo no poderlo cubrir con sus sueldos antes de verse en el caso de entregar la oficina, tuvo la debilidad de creer que recurriendo al juego podría salvarse, y esta falsa creencia lo impulsó á tomar mas dinero, dando esto por resultado el que se halle descubierto en una cantidad que le ha sido y le es imposible reintegrar por carecer de bienes; vistas las demas diligencias que se practicaron para la completa averiguacion del delito, y las circunstancias con que se cometió por el acusado; la confesion con cargos de este; lo alegado por su defensor en primera instancia; la sentencia en que el C. Juez de Distrito de Tamaulipas, de conformidad en parte con el dictámen de su Promotor fiscal y en vista de lo que dispone el real decreto de 7 de Noviembre de 1790 y la real orden de 14 de Marzo de 1807, y haciendo uso del arbitrio judicial, condenó al acusado Grijalva á sufrir la pena de dos años de prision, contados desde el dia 7 de Enero de 1870 en que se le declaró bien preso, de cuya sentencia no se interpuso recurso alguno: visto lo expuesto en esta segunda instancia por

el C. Promotor fiscal y el defensor de Grijalva C. Lic. Ramon Treviño, pidiendo ambos se reforme la sentencia de primera instancia aunque en diverso sentido, esto es, aquel, que se aumente la pena impuesta al reo á cinco años, y este que se declare compurgada la culpabilidad de su encomendado con el tiempo que lleva sufrido de prision: y visto por último cuanto mas debió y convino tenerse presente.

Considerando: que segun las constancias de autos, el reo está convicto y confeso de haber cometido el delito porque se le ha encausado: que la escepcion que alega, de que si bien tomó de los fondos que administraba y pertenecian á la Nacion la cantidad de dos mil ochocientos veinticuatro pesos ocho centavos, lo hizo con intencion de reintegrarlos, en nada le favorece; porque ademas de que no verificó el reintegro, aun habiéndolo, no dejaría por esto de merecer pena conforme á las prescripciones legales, pues que siempre debe castigarse el grave abuso que cometió distrayendo de su objeto los fondos que le estaban encomendados, principalmente cuando esto lo hizo para emplearlos en el juego, circunstancia que en vez de atenuar su falta, la agrava sobre manera.

Considerando: que lo demas que se ha hecho valer en favor del encausado como que el juego, estando prohibido, se tolera en Tampico, que debiéndose haber exigido fianza á Grijalva no se hizo por quien correspondía y otras semejantes, si bien son faltas y quizá punibles, lo son de otros empleados y en nada exculpa al reo de la que él ha cometido abusando en el ejercicio de su empleo.

Considerando: que aunque el Tribunal reputa aplicables al caso, las disposiciones legales en que el inferior funda su sentencia, no está conforme en que el autor del delito de que se trata quede bien castigado con el minimum de la pena que se señala en dichas disposiciones; porque en vez de que en el caso concurren circunstancias atenuan-

tes y en virtud de estas pudiera imponérsele el minimum de la pena, las hay agravantes y de mucha consideracion como es la de haber tomado deliberadamente los fondos de que se ha hablado, no para satisfacer necesidades de su familia, sino para fomentar un vicio.

Por las razones y consideraciones expuestas y por los propios legales fundamentos de la sentencia de primera instancia, en uso del arbitrio judicial que acuerda la ley 8ª tit. 31 part. 7ª, y obrando con la mayor equidad, debía fallar y fallo:

Primero: Se reforma la referida sentencia de primera instancia, imponiendo al encausado Nicolas Grijalva, la pena de tres años de prision, contados desde el dia 7 de Enero de 1870 en que se le declaró bien preso, destituyéndolo del empleo que desempeñaba y declarándolo inhabil para obtener otro de confianza.

Segundo: Notifíquese, y sacándose copia de esta sentencia para mandar al Ministerio de Justicia y al Juzgado de Distrito de Tamaulipas, remítase la causa á la Suprema Corte para los efectos legales.

Así yo el Magistrado del Tribunal de Circuito de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas, definitivamente juzgando, lo decreté y firmé con testigos de asistencia por ausencia del secretario. Doy fé.—Firmado.—*Lic. Rafael Treviño y Garza.—A.—Francisco A. Lozano.—A.—Pedro Rayón.*

Es copia que certifico. Monterey á 27 de Julio de 1871.—*Rafael Treviño y Garza.—A.—Francisco A. Lozano.—A.—Pedro Rayón.*

Pedimento del Procurador General de la Nacion.

El Procurador General de la Nacion dice: que en el Juzgado de Distrito del Estado de Tamaulipas se siguió causa contra D. Nicolás Grijalva, Administrador principal que fué de correos en la Ciudad de Tampi-

co, por el delito de peculado. Averiguado y probado el delito, el Juzgado falló en definitiva, primero: condenando á Grijalva á dos años de prision que debian contarse desde el 7 de Enero de 1870. Segundo: declarando que por no estar en las facultades del Juez privarlo de su destino, se comunicase esta resolucion al Ministro de Gobernacion para los efectos á que hubiere lugar.

Grijalva y su defensor se conformaron con este fallo; y la causa fué remitida para su revision al Tribunal de Circuito de Monterey. Este reformó el fallo de primera instancia, imponiendo á Grijalva tres años de prision contados desde el 7 de Enero de 1870; lo destituyó del empleo que desempeñaba y lo declaró inhabil para obtener otro de confianza.

Tanto el Juez de Distrito como el Magistrado de Circuito, se fundan en las prevenciones del real decreto de 7 de Noviembre de 1790, la real orden de 14 de Marzo de 1807, y el arbitrio que á los jueces concede la ley octava tit. 31 Part. sétima; pero discrepan, en que el Juez de Distrito creyó conveniente aplicar el minimum de la pena y entendió equivocadamente que no estaba en sus facultades declarar la destitucion é inhabilidad del empleado procesado; mientras que el Tribunal de Circuito, examinando las circunstancias del caso, las encuentra mas bien agravantes que atenuantes, y reconoce el principio legal de que en las penas impuestas á un empleado, caben muy bien la de destitucion y la de inhabilidad.

El delito de peculado de que se acusó á Grijalva, está probado no solo por datos intachables sino tambien por su propia confesion; y la circunstancia tambien probada de haber perdido en el juego las cantidades que malamente tomó del fondo que manejaba, es en extremo agravante, porque prueba inmoralidad por una parte y por otra haber destinado el dinero á usos ilícitos.

Para imponer á Grijalva los tres años de prision que el Tribunal de Circuito le impuso, son un buen fundamento, el real decreto

de 7 de Noviembre de 1790 y la real orden de 14 de Marzo de 1807, que indudablemente están vigentes; y para imponer la destitución é inhabilidad, es un buen fundamento el artículo primero capítulo segundo del decreto de las Cortes españolas de 24 de Marzo de 1813; y por tales consideraciones, el Procurador General pide sea confirmada en todas sus partes la sentencia de vista pronunciada en 24 de Julio del corriente año.—México, Setiembre 25 de 1873.—*L. Guzman.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 12 de 1873.—Vista la causa instruida contra D. Nicolás Grijalva por defraudacion en los fondos que administró como contador y administrador interino de la oficina de Correos de Tampico. Vista la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Tamaulipas en 8 de Setiembre de 1870, que condenó al expresado Grijalva á la pena de dos años de prision incluyéndose en ellos el tiempo de la ya sufrida, desde el 7 de Enero del mismo año; la dictada en segunda instancia en 24 de Julio de 1871, que reformando la de 1ª impone al encausado la pena de tres años de prision, contados desde el referido día 7 del expresado Enero, en que se le declaró bien preso, y además á la destitucion del empleo que gozaba y lo declaró inhabil para obtener otro de confianza; lo pedido ante ésta 1ª Sala por el Sr. Procurador General de la Nación; y Considerando: que el delito de que se le ha hecho cargo á Grijalva, está probado en autos por la propia confesion del reo, suficientemente administrada, en las mismas constancias procesales; de conformidad con lo pedido por el Sr. Procurador general y por los propios legales fundamentos en que se apoya el fallo pronunciado por el C. Magistrado de Circuito en 24 de Julio de 1871, se decreta: que es de confirmarse
TOMO IV.—PARTE II.

y se confirma la sentencia de vista que condena á D. Nicolás Grijalva á la pena de tres años de prision contados desde el día 7 de Enero de 1870, en que se le declaró bien preso, destituyendolo del empleo que desempeñaba y declarándolo inhabil para obtener otro de confianza.

Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Arza.*—*S. Guzman.*—*Juán M. Aguilar,* secretario.

Es copia. México, Agosto 13 de 1873.—*Alejo Gomez Nguilar.*

CRIMINAL.

Causa instruida ante el Juzgado de Distrito Guanajuato contra Sabás Ponce, por circulacion de moneda falsa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que el día 29 de Setiembre último, Sabás Ponce ocurrió á una tienda que pertenece al C. Sabino García, situada en la calle del Toro en la villa de Salamanca, á comprar cuartilla de carne que pagó con una peseta que frotándola conoció el C. García que era de cobre, y para cerciorarse, preguntó al agente de policía C. Antonio Conzalez si era buena, y viendo esto que era falsa, se dirigió á Ponce con el objeto de registrarla y resistiéndose, llamó al guarda nocturno C. Florentino Saldaña, el que al tomar á Ponce de la mano notó que